

Propuestas, iniciativas y experiencias para alimentar el Pacto de Milán

La adhesión al Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milán de una veintena de ciudades en el Estado español ha generado cierta expectación en ver cómo se materializan los compromisos adoptados. Existen numerosas experiencias en el ámbito estatal e internacional, que pueden servir de referencia para identificar claves de acción, barreras y retos para lograr un salto de escala en las alternativas agroecológicas y propiciar la transición hacia un sistema agroalimentario local más justo y sostenible.

El Pacto de Milán como marco de coproducción de políticas municipales

Coleccionar o coordinar políticas agroalimentarias

En otoño de 2015 el Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milán fue suscrito por 122 alcaldes reunidos en dicha ciudad italiana, en el marco de la Exposición Internacional de 2015 cuyo tema central era precisamente la alimentación. Estos eventos son una manifestación de cómo la alimentación, en sus múltiples facetas, ha ido adquiriendo una creciente centralidad en el imaginario social, académico y político en las últimas décadas, con un consenso general sobre el hecho de que será uno de los grandes retos globales. Considerando sus fundamentos estructurales, el sistema agroalimentario globalizado es indefendible tanto por los impactos ecológicos, socioeconómicos y culturales que genera como por su alta vulnerabilidad en un contexto de crisis de las energías fósiles y cambio climático, por lo que es urgente abordar su transformación. En este contexto, a través del Pacto de Milán los gobiernos locales reconocen su responsabilidad como un actor central en la definición de políticas para ordenar la transición hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles, saludables, socialmente justos y resilientes.

Nerea Morán Alonso es doctora en Arquitectura y miembro de Surcos Urbanos

En realidad son ya numerosas las políticas municipales relacionadas de una forma u otra con la alimentación; no podía dejar de ser así dado que es un aspecto central de la vida urbana. Las políticas y regulaciones municipales relativas a la economía, el urbanismo, la protección social, la cultura, la educación y a otras áreas de gobierno afectan directa o indirectamente a la organización del sistema agroalimentario a escala local, aunque hasta el momento se han abordado generalmente como actuaciones sectoriales. Una de las virtudes del Pacto de Milán es que propone una mirada sistémica, fomentando las sinergias y la articulación entre los programas de acceso a la alimentación para las poblaciones más vulnerables, la dinamización de la economía local o la sostenibilidad urbana en relación con el sistema agroalimentario. Como indicaba la experta Roberta Sonnino recientemente en un acto celebrado en Madrid, cuando hablamos de desarrollar políticas alimentarias no se trata tanto de coleccionar políticas como de coordinarlas; el reto está en conseguir que sean coherentes, se retroalimenten, se generen sinergias, se incremente su impacto y, en definitiva, se asegure una mirada más holística e integral desde cada área de actuación.

**El Pacto de Milán propone una mirada sistémica,
fomentando las sinergias y la articulación entre los programas
de acceso a la alimentación para las poblaciones más vulnerables,
la dinamización de la economía local o la sostenibilidad urbana
en relación con el sistema agroalimentario**

Otra de las características del Pacto de Milán es que sitúa la participación y la gobernanza en el centro de la definición y desarrollo de las políticas alimentarias urbanas, definiendo como una de las líneas de trabajo la creación de espacios de participación en forma de foros, consejos o mesas de coordinación entre actores políticos, económicos y sociales. En este sentido, las ciudades se comprometen a establecer un diálogo con los distintos actores implicados en la sostenibilidad y equidad alimentaria en sus territorios.

El papel de los movimientos sociales

La ventana de oportunidad que abre la existencia del Pacto de Milán ha sido aprovechada en el Estado español por los movimientos sociales y los actores económicos vinculados a la agroecología para legitimar sus reclamaciones y propuestas históricas, poniendo encima de la mesa las alternativas agroalimentarias que llevan décadas construyendo, por ejemplo en relación a la vinculación entre producción y consumo a través de proyectos integrales, a la lucha por una alimentación sostenible y saludable en los comedores escolares, o a otras experiencias más recientes de agroecología urbana, como las de huertos comunitarios.

En este sentido, el Pacto de Milán sería una oportunidad para lograr un salto de escala, asumiendo que con los recursos propios movilizados hasta el momento, y con el marco institucional y normativo existente se alcanza un umbral de acción que es muy difícil de superar. Para visibilizar, fortalecer y extender las alternativas, aumentar el número de personas implicadas en ellas, hacerlas más accesibles y multiplicar el impacto económico y social que generan es necesario el apoyo y la complicidad institucional. Y lo es no solo porque desde los gobiernos locales se pueden movilizar recursos, o aproximar al conjunto de la población cuestiones y prácticas que eran minoritarias, sino principalmente por la capacidad de regulación normativa y de definición de un modelo de ciudad coherente en sus manifestaciones territorial, económica y social.

Aunque la posibilidad de participar en la coproducción de políticas públicas que brinda el Pacto de Milán es sin duda una buena oportunidad, también es cierto que existen dificultades de articulación entre los gobiernos municipales y los movimientos sociales. Sus ritmos, prioridades y lenguajes son diferentes, y también lo es el papel que debe jugar cada uno en el desarrollo de las acciones consensuadas.

Como demuestra la práctica de los movimientos sociales, la nueva cultura alimentaria va de la mano de una nueva cultura del territorio. Una cuestión fundamental para hacer más justo, sostenible y resiliente el sistema alimentario es su reterritorialización, es decir, su integración, vinculación y adaptación a los territorios concretos, tanto en el sentido físico, como económico, ecológico, simbólico, afectivo y político. Por una parte, esto se refiere a la relocalización de las actividades y procesos de la cadena alimentaria, aumentando la producción local y vinculándola a las actividades de transformación, a la distribución de proximidad y a la recuperación de los residuos para cerrar el ciclo metabólico de materia orgánica. Además, una producción territorializada gestiona y cuida los agroecosistemas de una forma sostenible y adaptada a las posibilidades que brindan la geografía, el clima, los recursos hídricos y la biodiversidad local. La reterritorialización se refiere finalmente a la “conciencia de lugar”,¹ a la vinculación identitaria y la defensa del territorio, y a la democratización en la toma de decisiones sobre el sistema agroalimentario.

Panorama de propuestas, iniciativas y experiencias

Como ya se ha indicado, solo han pasado dos años desde que se hizo público el Pacto de Milán. Por tanto, aunque se están desarrollando nuevas políticas y se están definiendo estrategias y planes de actuación es pronto para evaluar los efectos que se derivan del

¹ J. L. Fernández Casadevante y Nerea Morán, «Entrevista a Alberto Magnaghi», Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 143, 2013, pp. 143 – 153, disponible en: https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Analisis/2014/Entrevista_Alberto_Magnaghi_JL_Fernandez_Casadevante_N_Moran.pdf

mismo en los municipios adheridos. Por suerte contamos con un amplio repertorio de experiencias que se han venido desarrollando, impulsadas por distintos actores institucionales y de la sociedad civil, que están alimentando las políticas y estrategias alimentarias y que pueden ofrecernos claves sobre la diversidad de propuestas, escalas, actores implicados y modelos de gestión posibles.

Estrategias alimentarias y órganos de gobernanza

Las estrategias alimentarias se pueden destacar como una de las iniciativas más ambiciosas y que en el Estado español han sido una consecuencia directa de la firma del Pacto de Milán, excepto en Vitoria-Gasteiz que cuenta con un proceso previo impulsado desde los movimientos sociales locales.²

La nueva cultura alimentaria va de la mano de una nueva cultura del territorio para hacer más justo, sostenible y resiliente el sistema alimentario

Ciudades europeas y norteamericanas como Bristol,³ Gante,⁴ Bruselas,⁵ Milán,⁶ Baltimore,⁷ Vancouver⁸ o Toronto⁹ (estas tres últimas ciudades han sido reconocidas en los Milan Pact Awards 2016),¹⁰ cuentan con estrategias alimentarias. En los últimos dos años se han comenzado a desarrollar también en ciudades como Barcelona,¹¹ Madrid,¹² Valladolid, Valencia o Córdoba. El objetivo de estas estrategias es precisamente la definición

² Véanse los distintos documentos del proceso de definición de la estrategia, disponible en: http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u6d939fe2_1523968eb86__7e24

³ *A good food plan for Bristol*, disponible en: <http://bristolfoodpolicycouncil.org/>

⁴ *Gent en Garde Food Policy*, disponible en: <https://stad.gent/ghent-international/city-policy/food-strategy-ghent/food-strategy-ghent-gent-en-garde>

⁵ *Good food strategy. Towards a sustainable food system in the Brussels-capital region*, disponible en: www.goodfood.brussels

⁶ *Milano Food Policy*, disponible en: <http://www.foodpolicymilano.org>

⁷ *Baltimore Food Policy Initiative*, disponible en: <http://baltimoresustainability.org/projects/baltimore-food-policy-initiative>

⁸ *What feeds us: Vancouver Food Strategy*, disponible en: <http://vancouver.ca/people-programs/food.aspx>

⁹ *Toronto Food Strategy*, disponible en: <https://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=75ab044e17e32410VgnVCM10000071d60f89RCRD>

¹⁰ <http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/2016/10/14/milan-pact-awards-2016-winners/>

¹¹ *Estratègia d'impuls de la política alimentària 2016-2019*, disponible en:

<http://ajuntament.barcelona.cat/omic/es/actualidad/estrategia-de-impulso-de-la-politica-alimentaria-2016-2019>

¹² <http://madridalimenta.madrid.es>

de una visión y unos objetivos comunes en torno a los distintos aspectos del sistema alimentario, y la coordinación de políticas sectoriales. Para ello, requieren la implicación de las distintas áreas o departamentos municipales y la generación de espacios de intercambio y colaboración entre los mismos. Además, implican un proceso participativo para la definición de sus contenidos, lo que también permiten visibilizar y escuchar a distintos agentes, dando valor a su conocimiento y su trabajo.

En paralelo la constitución de espacios de participación, bien sea en forma de foros, mesas, consejos alimentarios u otras fórmulas, es otra de las iniciativas más ambiciosas que ha propiciado la firma del Pacto. El papel que pueden jugar estos espacios, su composición, funcionamiento y sus atribuciones es algo que está actualmente en el centro del debate, como se ha podido constatar en las Jornadas «Sociedad civil, alimentación y ciudades sostenibles», celebradas en Valencia en septiembre de 2017, que se articulaban precisamente en torno a la gobernanza alimentaria.

Uno de los aspectos más interesantes en estos procesos y espacios de participación, además, es reunir y vincular los aspectos sociales y los ecológicos, dos grandes ámbitos de lucha social en torno a la alimentación que generalmente se han trabajado por separado, aunque cada vez son más habituales las respuestas a la pobreza alimentaria desde una perspectiva agroecológica.

Derecho a la alimentación

En el marco de la crisis socioeconómica actual se han hecho comunes expresiones que dan una idea precisa sobre las consecuencias en la vida cotidiana del desempleo, la precariedad y la falta de una cobertura social suficiente. Así, se habla de pobreza energética y de pobreza alimentaria, adjetivando distintas formas de privación de recursos básicos. A la vez se han organizado movimientos sociales en torno a estas cuestiones, que sitúan en primer plano el derecho a la vivienda o el derecho a la alimentación. En ellos se ponen encima de la mesa los fundamentos estructurales de la pobreza y sus consecuencias en forma de injusticia social y territorial. Frente a la individualización de causas y soluciones se plantea la capacidad y necesidad de ser actores activos en la respuesta a la crisis, y no meros receptores de ayuda. Estos son los planteamientos de plataformas como la madrileña Carta contra el Hambre, en la que se integran movimientos sociales, cristianos de base y asociaciones vecinales, que han participado en los talleres realizados en el proceso de definición de la estrategia alimentaria de la ciudad.

La pobreza alimentaria no se manifiesta, como ocurría en el pasado, en forma de desnutrición, sino, por el contrario, en forma de sobrepeso y obesidad ligados a una mala ali-

mentación y al excesivo consumo de calorías vacías. En este sentido se plantean como fundamentales también las acciones de formación en temas nutricionales, habilidades culinarias y opciones saludables de alimentación y hábitos de vida. Algunas prácticas de referencia en este sentido en el ámbito internacional son los centros comunitarios de alimentación canadienses (*Community Food Centres*)¹³, que plantean una actuación integral en acceso a la alimentación, formación y participación comunitaria y en los que se pueden encontrar espacios para cultivar, cocinar y comer, adquirir alimentos saludables y asequibles, realizar formación y talleres, asesoramiento y campañas de incidencia política.

En las despensas y cocinas comunitarias, los restaurantes solidarios y los comedores populares se evita la estigmatización de las personas participantes, se apuesta por la calidad y equilibrio de las dietas, y se generan espacios de responsabilidad y de inserción laboral

Como se ha constatado en diversos estudios, los tradicionales bancos de alimentos, que son la principal respuesta a la emergencia alimentaria en nuestra geografía, además de perpetuar la visión asistencialista, no resuelven los problemas de malnutrición debido al tipo de productos que reparten.¹⁴ Como alternativa a estos modelos se están desarrollando soluciones como las despensas y cocinas comunitarias, los restaurantes solidarios y los comedores populares, en los que se evita la estigmatización de las personas participantes, se apuesta por la calidad y equilibrio de las dietas, y se generan espacios de responsabilidad y de inserción laboral ligadas a la producción, transformación, distribución y consumo alimentario. Proyectos de este tipo están siendo impulsados por redes de solidaridad popular, centros sociales como Rey Heredia en Córdoba, con su cocina abierta;¹⁵ asambleas de parados como la de Casería de Montijo en Granada, con un proyecto de agricultura ecológica con certificación social; o redes vecinales como la Asociación Desarrollo Comunitario del barrio de Buenos Aires en Salamanca, con un proyecto de producción, transformación y *catering*;¹⁶ o ALEI en Terrassa, con un restaurante del tiempo en el que se puede pagar con dinero o con trabajo.¹⁷

¹³ <https://cfccanada.ca>

¹⁴ A. Pomar, y G. Tendero, «Respuestas agroecológicas a la emergencia alimentaria», en D. López, J. L. Fdez. Casadevante, N. Morán, E. Oteros Rozas (eds.), *Arraigar las instituciones. Propuestas de políticas agroecológicas desde los movimientos sociales*, Libros en Acción, 2017, pp. 124-132.

¹⁵ <http://reyheredia.org/>

¹⁶ Para los dos últimos proyectos y otros ejemplos véase J. L. Fernández Casadevante, «Periferias que alimentan dignidad», blog Última Llamada, *El Diario*, 6 de junio de 2016, disponible en: http://www.eldiario.es/ultima-llamada/Periferias-alimentan-dignidad_6_521157898.html

¹⁷ A. Pomar y Guillem Tendero, 2017. *Op. cit.*

La compra pública

La compra pública se destaca como una de las actuaciones que pueden generar más impacto en el marco del Pacto de Milán, dado el alto potencial que tiene la Administración como actor económico, tanto para apoyar productos y procesos éticos y sostenibles, como para asegurar el acceso a una alimentación más saludable a quienes tienen que alimentarse en los servicios públicos, que además de ser consumidores cautivos suelen ser personas en situación de necesitar mayores cuidados: niños y niñas, personas hospitalizadas, mayores en centros de día, población en riesgo de exclusión, etc.

El panorama en cuanto a la restauración colectiva pública es muy diverso, pero es en los comedores escolares donde existe una mayor trayectoria de experiencias concretas y un movimiento que se ha estructurado en los últimos años en torno a las AMPA y equipos técnicos comprometidos. Aunque los modelos de gestión y los protocolos de contratación varían entre las comunidades autónomas, dentro de sus competencias las ciudades firmantes del Pacto están adquiriendo compromisos en relación a la restauración escolar. Así se están incorporando alimentos ecológicos, de circuitos cortos y de comercio justo en los pliegos de licitación de la gestión de comedores escolares en ciudades como Valencia, Pamplona, Zaragoza o Madrid.

Los procesos más transversales son los que vinculan al sector productivo con las comunidades escolares, acompañando el incremento de la demanda a la oferta disponible, y trabajando en paralelo la articulación de la producción, con la formación y sensibilización de equipos de cocina, comedor, docentes y familias. Esta perspectiva se ha aplicado en proyectos como Ekolapiko en Guipuzcoa,¹⁸ o Ecocomedores en Canarias.¹⁹ Una de las principales dificultades que han afrontado multitud de iniciativas en distintos territorios es precisamente conseguir un suministro suficiente, estable y diverso, que requiere una planificación y coordinación en el sector productivo que no siempre es fácil. Por otra parte, cuando se afronta una transformación de la restauración pública a gran escala se corre el riesgo de dejar atrás a la pequeña producción agroecológica que no puede responder a las condiciones exigidas. Además de plantear un incremento paulatino del porcentaje y tipo de productos que se incorporan a los menús, es recomendable realizar también una labor de acompañamiento a suministradores y empresas implicadas en los procesos.

Algunos municipios como Orduña están avanzando en modelos basados en cocinas municipales, intentando extender a albergues y escuelas el sistema que ya funciona en la residencia de mayores, en la que se consume producto local, ecológico y de temporada

¹⁸ Véase <http://www.biolur.net/es/proyectos/ekolapikoc>

¹⁹ Programa Ecocomedores escolares de Canarias, [en línea], disponible en: <https://www.ecocomedoresescolaresdecana-rias.com/>

suministrado directamente por los productores, con los cuales se llega a un consenso anual sobre los precios. Pero también los servicios de *catering* privado ofrecen posibilidades para apoyar a la economía social y solidaria (ESS), como ocurre en varios centros escolares en Cantabria, donde varios centros escolares trabajan con la empresa social “Depersonas cocinando con sentido”,²⁰ que aúna la inserción laboral con el apoyo a la producción de proximidad y ecológica. En este proyecto, en el que trabajan personas con diversidad intelectual y física, cuentan con el apoyo de una cadena local de restaurantes y del Ayuntamiento, que ha cedido una cocina industrial municipal.

Son muchas las posibilidades en este ámbito y muchas las lecciones que se pueden aprender de programas y proyectos concretos en el Estado y en el extranjero. Algunas capitales europeas como Roma²¹ o Viena tienen una experiencia de décadas en la promoción de la compra pública alimentaria sostenible; en la última, para todos los contratos públicos de la ciudad es obligatorio destinar al menos el 30% del presupuesto a productos ecológicos, libres de OMG, de comercio justo, o de circuito corto.²²

Pequeña producción y transformación alimentaria

Otro tipo de acciones son las que se orientan al apoyo directo al sector productivo. Entre ellas, una básica es la protección del suelo fértil y el patrimonio agrario, y el reconocimiento de estos espacios como recursos valiosos y limitados. La protección del suelo frente a la urbanización es una competencia municipal que se materializa en el planeamiento, aunque también existe y es necesaria una perspectiva territorial más amplia dependiendo de los contextos urbanos, estableciendo, por ejemplo, anillos agrícolas o parques agrarios de escala urbana, metropolitana o comarcal.²³

Si es necesaria por una parte la preservación del suelo, no lo es menos asegurar la preservación y transmisión del conocimiento y la actividad agraria. En este sentido se están desarrollando numerosos proyectos en los que se utilizan suelos públicos para la formación y acompañamiento en producción ecológica, principalmente hortícola. Algunos ejemplos de referencia serían los programas formativos de la Red Terrae²⁴ en numerosos municipios de

²⁰ <http://depersonascocinandoconsentido.es/>

²¹ Véase entrevista a Roberta Sonnino en este mismo número.

²² J. L. Fernández Casadevante, N. Morán, J. del Valle y A. Esteban, *Alimentar el cambio. Diagnóstico sobre los comedores escolares de la Comunidad de Madrid y su transición hacia modelos más saludables y sostenibles*, Garúa, 2017, disponible en: <http://alimentarelcambio.es/documentacion/>

²³ M. Simón, A. Zazo y N. Morán, «Protección y fomento de los usos agrarios desde el urbanismo», en D. López, J. L. Fdez. Casadevante, N. Morán y E. Oteros Rozas (eds.), 2017, pp. 87-97, *Op. cit.*; C. Yacamán y A. Zazo (coords.), *El Parque Agrario: una figura de transición hacia nuevos modelos de gobernanza territorial y alimentaria*, Heliconia S. Coop. Mad., 2015.

²⁴ <http://www.tierrasagroecologicas.es/>

toda la península, en los que además se ofrece un marco de comercialización avalado por los ayuntamientos con la marca Ecom0 Terrae para la venta en restaurantes o comercios; o en los itinerarios de acompañamiento en la formación de proyectos empresariales de Agrolab en Perales de Tajuña y en El Escorial, en la Comunidad de Madrid.²⁵

El fomento de los canales cortos es otra de las estrategias clave para mejorar la viabilidad económica del sector productivo y para aproximar a productores y consumidores

El mayor reto de este tipo de iniciativas se encuentra en la consolidación de los proyectos, por la dificultad de acceso a la tierra una vez acabado el proceso de formación, sobre todo en los entornos metropolitanos. Algunas ciudades han creado bancos de tierras municipales para el desarrollo de proyectos profesionales. Este es el caso de Rivas, con su parque Agroecológico Soto del Grillo,²⁶ en cuyas 45 ha se han habilitado 21 parcelas con riego y espacio de almacenamiento, que se arriendan a proyectos de agricultura ecológica. O el banco de tierras “huertas km0” de Zaragoza,²⁷ que cuenta con 36 ha de regadío para el acceso a 15 arrendatarios dando prioridad a personas que hayan completado el programa formativo municipal.

Por otra parte, la transformación artesanal y ecológica también es una actividad económica que está recibiendo atención en los entornos urbanos mediante el apoyo y acompañamiento a la creación de microempresas, el acceso a instalaciones habilitadas en forma de polígonos artesanales o incubadoras agroalimentarias. Algunas experiencias internacionales en este sentido se encuentran en Toronto, donde se constituyó el TFBI - *Toronto Food Bussiness Incubator*,²⁸ con apoyo del gobierno municipal, que actúa a escala metropolitana, en una nave alimentaria de 2.000 m² que cuenta con cuatro cocinas industriales y un taller de panadería. Como experiencia más cercana que está iniciando su actividad encontramos el proyecto MARES. en Madrid,²⁹ en el que se realizará formación y acompañamiento a la creación y formalización de proyectos empresariales de transformación alimentaria y *catering*, en un espacio habilitado con cocina industrial.

Siguiendo con la cadena alimentaria, además de producir y transformar, para distribuir en proximidad es importante el acceso a espacios logísticos de una escala adecuada al tamaño y necesidades de los pequeños productores locales. De esta forma se facilita la

²⁵ <https://agrolabmadrid.com>

²⁶ <http://www.rivasciudad.es/portal/sotodelgrillo/sotodelgrillo.jsp?codResi=1&codMenu=748>

²⁷ https://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/detalle_Tramite?id=28100

²⁸ www.foodstarter.ca

²⁹ <https://maresmadrid.es/alimentacion/>

coordinación entre productores y la relación con pequeños comercializadores y consumidores. Algunas experiencias en esta línea son la central de compras del Maresme,³⁰ que cuenta con el apoyo de administraciones a escala comarcal y provincial, con la participación de productores ecológicos locales; o la Ecocentral de Barcelona, de iniciativa privada, que actualmente abastece a 21 escuelas.³¹

Apoyo a los canales cortos

El fomento de los canales cortos es otra de las estrategias clave para mejorar la viabilidad económica del sector productivo y para aproximar a productores y consumidores. Una tipología muy extendida en el Estado español son las distintas formas de cooperativas y grupos de consumo. En algunas ciudades se han conformado tiendas cooperativas, como Landare en Pamplona³² o Bioalai en Vitoria-Gasteiz³³ en las que participan miles de familias, y otras de menor tamaño como el Encinar en Granada,³⁴ Árbore en Vigo,³⁵ o La Tejedora en Córdoba;³⁶ algunas de ellas aúnan la comercialización de productos agroalimentarios ecológicos, artesanos y/o de proximidad, con otros servicios de la ESS. Otra de las formas de fomento de canales cortos con más auge en la actualidad son los mercados de venta directa al aire libre, en diversas ciudades los mismos productores se han hecho cargo de la gestión de estos espacios, conformando asociaciones o plataformas, como es el caso del Ecomercado promovido y gestionado por la Red Agroecológica de Granada,³⁷ o la asociación de productores agroecológicos AUPA en Madrid.³⁸

Una propuesta recurrente en relación a la comercialización es la recuperación de los mercados municipales como espacios de venta de productos de proximidad y de canales cortos frente a las distintas derivas que se están produciendo en estos equipamientos públicos, bien sea hacia una excesiva elitización debida a la orientación hacia el turismo y el ocio, en el caso de aquellos situados en espacios de mayor centralidad, o por su dependencia de las grandes superficies en otros casos.³⁹ También es cierto que existen experiencias en

³⁰ <http://www.ccmareme.cat/11355>

³¹ <http://ecocentral.cat>

³² <http://landare.org>

³³ <http://bioalai.org>

³⁴ <http://asociacionelencinar.org>

³⁵ <http://arbore.org>

³⁶ <http://latejedora.org>

³⁷ <http://ecomercadogranada.org/ecomercados>

³⁸ <https://blogaupa.wordpress.com/aupa/>

³⁹ C. Soler, «Dinamización de sistemas agroalimentarios y redes de distribución locales», en D. López, J. L. Fdez. Casadevante, N. Morán y E. Oteros Rozas (eds.), 2017, pp. 78-86, *Op. cit.*; Alejandro Rodríguez, «La transformación de los mercados municipales en Madrid. Análisis legislativo, comercial y económico de los mercados de abastos madrileños», *Territorios en Formación* núm. 7, 2014, disponible en: <http://polired.upm.es/index.php/territoriosenformacion/article/view/2990>

diversas ciudades donde se ha mantenido o se ha habilitado un espacio reservado para la venta directa dentro de los mercados municipales, o se realizan campañas de visibilización de productos ecológicos, como ocurre en Vitoria-Gasteiz, en Gijón o en Barcelona.

El verdadero reto es que no exista una discontinuidad entre las “pequeñas políticas” y las “grandes políticas”, sino que la mirada de la sostenibilidad agroalimentaria permee en el modelo territorial y económico

Finalmente, otra cuestión de interés es la visibilización de productos y establecimientos de pequeño comercio y restauración, mediante distintivos que se asignan a los productos de proximidad, ecológicos o agroecológicos. Así, los Parques Agrarios ya mencionados cuentan con sus propios sellos y ofrecen información de los establecimientos donde se pueden encontrar estos productos. Valencia recientemente también ha establecido una marca de proximidad (“Aphorta”) para identificar productos de la huerta que se comercializan en la Tira de contar,⁴⁰ y en cuya definición y dinamización se han involucrado distintos departamentos municipales, Mercavalencia, organizaciones de consumidores y ONGD.⁴¹

¿Hasta dónde podemos llegar?

Sin duda nos encontramos en un momento de efervescencia en el que existen numerosos espacios de encuentro, debate e intercambio. Este contexto permite una mayor visibilidad de iniciativas y propuestas como las que se han descrito en este texto, generando un interesante potencial de contagio y extensión.

En los procesos locales, las primeras fases de encuentro, debate y propuesta dentro de las dinámicas de definición de políticas en torno al Pacto de Milán son claramente ilusionantes en la medida en que están permitiendo soñar en común cómo queremos que se alimenten nuestras ciudades, y definir conjuntamente objetivos y líneas prioritarias de acción. Estos procesos generan expectativas sobre su desarrollo, y se están empezando a experimentar las dificultades de llevar a la práctica algunas propuestas. Por tanto, será interesante ver cómo van sedimentando las ideas, cómo se materializan los proyectos y cómo evolucionan los espacios de gobernanza y las prácticas de coproducción de políticas públicas.

⁴⁰ Para más información sobre la institución foral Tira de contar, véase: <https://www.mercavalencia.es/tira-de-contar/>

⁴¹ Véase <http://valenciacapitalsostenible.org/la-huerta-se-viste-de-etiqueta/>

Uno de los peligros de esa fase de sedimentación es que las políticas alimentarias pasen a formar parte de los repertorios de políticas municipales como un accesorio más, sin que tengan una capacidad transformadora real. Es cierto que son necesarias actuaciones concretas y pequeñas mejoras con un impacto directo en la vida cotidiana de las personas. Pero el verdadero reto es que no exista una discontinuidad entre las “pequeñas políticas” y las “grandes políticas”, sino que la mirada de la sostenibilidad agroalimentaria permee en el modelo territorial y económico.

Aunque el Pacto de Milán es un marco muy interesante para que las ciudades tomen conciencia y se responsabilicen de su papel en el sistema agroalimentario, en Valencia se llamó la atención sobre el peligro de poner el foco de atención únicamente en las ciudades, olvidando un mundo rural que sigue constituyendo la mayor parte de la superficie peninsular, aunque solo un pequeño porcentaje de las personas vivan en él. No debemos renunciar a perseguir un necesario reequilibrio territorial, ni podemos permitirnos perder la diversidad de patrimonio natural y cultural, conocimientos, paisajes, y recursos que se encuentran en el mundo rural. El marco del Pacto de Milán puede servir para visibilizar y dar valor a esa otra cara del territorio, y para tejer alianzas urbano rurales de igual a igual.